



IZQUIERDA, ESTADO-NACION Y CIUDADANIA EUROPEA

David MILLER

Cuando la Unión Europea se encamina resueltamente a lograr una plena integración política con la moneda única para Europa, la izquierda continúa manteniendo una posición ambivalente respecto al proyecto de gobierno supranacional. El actual partido laborista británico, liderado por Tony Blair, se muestra sensiblemente más favorable al europeísmo que los derrotados conservadores pero, visto desde la perspectiva histórica, no puede decirse que ninguno de los dos haya adoptado siempre la actitud que ahora los caracteriza. Ambos partidos han estado divididos entre proeuropeístas y antieuropeístas pero, hasta la llegada de Margaret Thatcher, el entusiasmo por el proyecto europeo prendía con mayor frecuencia entre los conservadores. Para la izquierda laborista, la pertenencia a la Comunidad Económica Europea (como se denominaba entonces) y a su ortodoxia económica era una camisa de fuerza impuesta a la política de los distintos gobiernos nacionales, y aun-

que este punto de vista parezca una herejía en el nuevo partido laborista, cabe esperar que volvamos a oírlo a medida que se anime el debate sobre la conveniencia de unirse a la moneda única. De igual modo, las presiones que le llegan del mundo de los grandes negocios pueden forzar a su debido tiempo al partido conservador a moderar su actual postura euroescéptica.

Sin duda, cabe encontrar un panorama no menos confuso y unos partidos que cambian también de posición con el tiempo en otros Estados miembros de la Unión Europea, ¿podríamos, entonces, aportar algo nuevo aquí? ¿Deberían mostrar los partidos de izquierda, por razones de principio, un entusiasmo mayor o menor que el de los conservadores por instituciones transnacionales como la UE, o se trata sencillamente de ir evaluando las propuestas a medida que se presentan? ¿Cómo debemos plantearnos el problema?

Si en busca de inspiración volvemos los ojos a la tradición socialista, encontraremos tendencias muy marcadas tanto a favor del nacionalismo como del internacionalismo. La corriente internacionalista hunde sus raíces filosóficas en la idea marxista (que, como en otras muchas ocasiones, su autor nunca sostuvo con tanta crudeza) de que las divisiones nacionales son una creación artificial de la clase capitalista para dividir al proletariado, y sus raíces políticas en la convicción de que el socialismo nunca sería posible en un solo país. La corriente nacionalista se debe, en primer lugar, a que no ha existido un solo proyecto socialista, en versión comunista o socialdemócrata, que no haya sido nacional, en el sentido de que todos fueron realizados por partidos y movimientos que actuaban dentro de las fronteras nacionales; y, en segundo lugar, a que los socialistas tuvieron que invocar la idea de la nación para llevarlos a cabo. Bastaría con recordar los casos de la Unión Soviética y la República Popular China, donde las llamadas a la solidaridad y al orgullo de la nación constituyeron uno de los ejes de la propaganda socialista, pero incluso socialdemócratas tan tibios como Bill Clinton y Tony Blair aderezan sus discursos con alusiones a «nuestra nación» y a «este gran país nuestro», para conseguir que su audiencia se digne considerar la posibilidad de sacrificar una pequeña parte de sus ganancias personales en aras del bien común.

Enfrentados a este conflicto aparente entre el internacionalismo socialista y el significado real de las lealtades nacionales, muchos miembros de la izquierda responden que el mantenimiento de la idea de nación es, sencillamente, un problema de realismo político. Puesto que la mayor parte del público al que se dirigen, en especial la mayoría de los miembros de la clase

obrero, manifiesta fuertes sentimientos nacionalistas, parece lógico utilizar esos sentimientos de un modo constructivo o, por lo menos, no herirlos directamente, para hacer posible la creación de un movimiento socialista. George Bernard Shaw dijo en cierta ocasión que si quieres rebelarte contra los zapatos de tacón alto, debes cuidarte de hacerlo con un sombrero muy elegante, pero esto es el principio y el final del problema. En la medida en que se pueda apartar al público de sus prejuicios nacionales contra una concepción más cosmopolita del mundo, no hay por qué considerar, por principio, al Estado-nación como una unidad de movilización política.

A mi parecer, esta respuesta habitual constituye un error de bulto. Para comprender el porqué de semejante afirmación conviene recordar, antes de nada, los valores que sostienen los proyectos políticos de la izquierda. Aunque, naturalmente, sería un asunto discutible, con toda seguridad podemos citar dos: la *democracia* y la *justicia social*. Todos aspiramos a vivir en una sociedad que permita un alto grado de control de las actuaciones políticas donde, además de la consulta para elegir a nuestros representantes cada cuatro o cinco años, podamos incidir directamente en su desarrollo; y queremos, también, una sociedad que combata con la actuación pública las enormes desigualdades que producen los mercados capitalistas, ya sea mediante la redistribución por vía de la seguridad social y el Estado del bienestar, ya sea con medios más radicales, con nuevas formas de organización económica (por ejemplo, el acceso de los trabajadores a la propiedad), que encaucen la distribución primaria de los ingresos hacia una mayor igualdad.

De momento no necesitamos precisar más los objetivos de la izquierda, porque nuestro interés aquí estriba en conocer su vinculación con el Estado-nación, tal como lo conocemos. Empezaremos por la democracia. La condición indispensable para que las decisiones políticas se tomen de un modo genuinamente democrático —mediante una discusión pública que permita oír la voz de todos los sectores sociales— es un grado suficiente de confianza entre la población electora, y para que las decisiones democráticas lleguen a buen puerto, cada grupo participante debe estar dispuesto a escuchar los otros puntos de vista y a moderar sus propias demandas, con el objetivo de alcanzar un compromiso aceptable para todos. Asimismo, una vez tomada la decisión, los que se encuentren en minoría —no cabe esperar decisiones unánimes— deben aceptar el resultado, sabiendo que su punto de vista se ha tomado en serio y que, en el porvenir, podrían ser ellos los vencedores. Todo esto requiere grandes dosis de confianza y comprensión hacia aquellos que disienten de nuestras ideas políticas, pero este tipo de

confianza es mucho más fácil entre personas que comparten una identidad nacional, hablan una misma lengua y tienen valores culturales comunes. Por el contrario, en los Estados multinacionales, donde la confianza es mayor dentro de cada grupo nacional que entre ellos, la política tiende a producirse en forma de pactos, de modo que cada grupo lo considera una victoria o una derrota del otro. Como ha sostenido Michael Lind («In Defense of Liberal Nationalism», *Foreign Affairs*, mayo-junio 1994), esta circunstancia debilita las perspectivas de la democracia, y su manifestación más radical puede ser el bloqueo.

Por otra parte, ¿qué decir de la justicia social? Todo sistema de estas características necesita que los ciudadanos limiten hasta cierto punto los beneficios que obtienen a título particular del sistema de mercado, y no sólo a través de la recaudación de impuestos o de la expropiación a los más ricos. Los trabajadores deben pagar impuestos o cuotas de la seguridad social si quieren conservar los servicios sociales y las pensiones de desempleo, y aceptar una normativa limpia y no discriminatoria para el empleo y la promoción. Ahora bien, ¿qué es lo que motiva al ciudadano para acceder a los sacrificios que impone la justicia social, tanto apoyando a los partidos que prometen la redistribución como, más sencillamente, comportándose generosamente en su vida cotidiana? Es más que evidente que esos sacrificios se hacen mejor cuanto más cerca nos sentimos del beneficiario de nuestro gesto. (Por ejemplo, los estudios psicológicos sobre la idea de justicia demuestran la tendencia a tratar como iguales a los demás cuando compartimos con ellos una identidad o unos valores.)

Desde este punto de vista, la nación es una fuente muy importante de identidad común, especialmente en aquellas sociedades con profundas divisiones de raza, etnia, religión o estilo de vida. Aunque las creencias o los valores personales de nuestro vecino de la casa o la calle de al lado no nos gusten ni nos caigan simpáticos, nos sentimos en cierto modo responsables de ellos y, puesto que los consideramos compatriotas, confiamos en que si hoy se benefician de nuestra contribución (por ejemplo, a través de los impuestos), mañana estarán dispuestos a devolvérsela si se vuelven las tornas y somos nosotros los necesitados de ayuda económica o cuidados médicos. Como sostiene Richard Rorty, los programas de apoyo a los grupos en desventaja de los barrios conflictivos resultan mucho más convincentes cuando se presentan como proyectos de ayuda «a los americanos» que cuando se habla sencillamente de «seres humanos». Esto no significa indiferencia hacia el destino de los otros seres humanos que pueblan el mundo, sino reconoci-

miento de que las aspiraciones a la justicia social están vinculadas a comunidades concretas, cuyos miembros se sienten mutuamente responsables.

Si la izquierda (como creemos) valora aún en algo la democracia y la justicia social, debe saber que la lucha por alcanzar esas metas implica la existencia de comunidades nacionales en las que la confianza mutua se genera en una identidad común aunque, al mismo tiempo, importa no presentar esa identidad como si se tratara de un hecho eterno de procedencia divina. Abundan los estudios en los que se demuestra que las divisiones nacionales que conocemos actualmente son un producto histórico, creado desde arriba por políticos ansiosos de consolidar nuevos Estados y, desde abajo, por minorías étnicas que pretendían sacudirse el yugo de los gobiernos dominados por la mayoría. Esto plantea la posibilidad de que las naciones actuales puedan reemplazarse por unidades mayores en el contexto europeo, es decir, que la propia Europa se convierta en la identidad y la ciudadanía que se sitúe por encima de las alianzas nacionales, y así lo esperan muchos dirigentes europeos en la actualidad. Pero, ¿se trata de una esperanza realista? ¿Debe la izquierda apoyar los movimientos en esa dirección?

Comencemos por la situación actual. Parece evidente que para los ciudadanos europeos la nación continúa siendo el centro de sus lealtades e identidades políticas. Cuando se les pregunta por quién serían capaces de ir a la guerra o quién quieren que se beneficie de sus impuestos, señalan siempre a sus compatriotas. La opinión ante la idea de la unidad europea en términos generales es bastante positiva, pero cuando se trata de la Unión Europea como institución aumenta la división de pareceres y no faltan países con una mayoría que prefiere mantenerse al margen. Europa no provoca las lealtades típicas de un Estado-nación. La unidad europea se considera un club eficaz, que brinda ventajas tales como una mayor libertad de movimientos y más acceso a los mercados y los puestos de trabajo, pero no crea identificación emocional.

Aunque Europa no pueda proporcionar una identidad nacional, ¿será capaz de crear una ciudadanía de tipo transnacional que represente un modelo para otras partes del mundo? Naturalmente, la ciudadanía europea existe en un sentido legal, pero ¿qué significa en la práctica? Los ciudadanos europeos disfrutan de derechos que no tienen los extranjeros, como, por ejemplo, la posibilidad de viajar libremente por todo el territorio y trabajar y estudiar en otros países de su ámbito. Existe, además, la posibilidad de denunciar cualquier actuación política

o legislación nacional ante el Tribunal Europeo de Justicia. Es cierto que este último derecho obliga a todos los gobiernos europeos a seguir ciertas líneas de actuación política, pero no debemos exagerar su alcance, porque se ha tenido buen cuidado en reducir los cometidos del Tribunal Europeo para no lesionar con facilidad el derecho de los Estados miembros a seguir políticas distintas en materia de salud, educación o relaciones industriales, conforme a las tradiciones y preferencias de cada nación.

Si miráramos la ciudadanía europea a la luz de la teoría clásica de T. H. Marshall sobre la ciudadanía en general como aquella condición común que unifica los derechos civiles, políticos y sociales, descubriríamos que, hasta ahora, la pertenencia a Europa sólo comporta los del primer tipo. En un sentido técnico, podría decirse que los ciudadanos de Europa disfrutan de derechos políticos porque pueden elegir diputados al Parlamento europeo. No obstante, el interés de los votantes por la actividad de esa institución es mínimo y en las elecciones europeas los partidos plantean sobre todo problemas de orden nacional. Hablando en términos políticos, los ciudadanos continúan pensando y actuando como miembros del electorado de una nación concreta, ya que la ciudadanía social, el derecho a la sanidad, la educación, las pensiones, etcétera, siguen siendo competencia de los gobiernos nacionales, sujetos sólo a las normas comunes que imponen los tratados europeos y hace valer el Tribunal de Justicia, aunque queda aún tanto margen para variar la definición de esos derechos que resultaría difícil defender la existencia en un sentido concreto de una ciudadanía europea.

Si mi análisis de la situación actual es acertado, ¿qué novedades habría que introducir en la Unión Europea para acomodarla a los principios de democracia y justicia social que acabo de esbozar? ¿Por ejemplo, cabría la posibilidad de practicar la ciudadanía democrática a escala europea? Uno de los mayores obstáculos, como ha destacado Tony Judt en su obra *A Grand Illusion*, es la supervivencia de las divisiones lingüísticas entre los pueblos europeos. Aunque la élite política negocia utilizando el inglés como lengua común (parece que la oposición francesa está a punto de fracasar), si buscamos una democracia política en la que sea posible un debate público y amplio, debemos reconocer que sólo podríamos realizarlo en la lengua vernácula de cada comunidad. No podemos exigir que el ciudadano normal de Italia, Grecia o Dinamarca utilice el inglés o cualquier otra segunda lengua en sus discusiones políticas. Así pues, estos debates continuarían siendo opacos para los hablantes de otra lengua y, en vez de una opinión pública europea, capaz de echar los cimientos de una democracia transnacional, tendríamos opiniones pú-

blicas separadas que luego, eso sí, podrían reflejarse en las negociaciones de la élite ya en el ámbito europeo. Así pues, la relación sería esta: a mayor alcance y variedad de la ciudadanía, mayor fragilidad de las credenciales de la democracia.

Necesitamos plantearnos preguntas como éstas a propósito de la justicia social a escala europea. La actual redistribución entre Estados ricos y Estados pobres es sólo el resultado de ciertas políticas, regionales o de cualquier otro tipo, negociadas por las élites de Bruselas, y lo normal es que los ciudadanos ni siquiera conozcan su existencia, salvo cuando las transferencias los benefician directamente. La experiencia demuestra que su sentido de la responsabilidad no llegaría hasta permitir que se emplearan sus impuestos para los ciudadanos más pobres de otros Estados-nación. Existe, pues, un abismo entre la conciencia social del ciudadano y lo que ocurre sobre el terreno y, si mi hipótesis anterior es correcta, no se superará hasta que exista un sentimiento común de identidad europea que trascienda las fronteras nacionales.

Pero el tamaño y la complejidad del problema no harán más que aumentar cuando la Unión acepte a los Estados del centro y el Este de Europa que actualmente se encuentran en proceso de incorporación. Desarrollar el sistema económico y social de esos países para que puedan integrarse apropiadamente en una economía de corte europeo (con libertad de movimiento de la mano de obra, etcétera) requerirá una distribución de los recursos muy superior a la conocida hasta ahora. No parece que los ciudadanos de Francia o Gran Bretaña, relativamente prósperos, estén dispuestos a aportar los medios para que los polacos o los húngaros disfruten de una mayor igualdad si no existe un fuerte sentido de identificación mutua. (Se ha dicho muchas veces que los costes económicos de la incorporación de la antigua República Democrática a la Alemania actual habrían resultado insostenibles de no haber mediado el intenso sentimiento de identidad nacional pangermánica que surgió en los dramáticos momentos de la caída del muro de Berlín.) De nuevo, encontramos la misma situación de antes: Europa puede elegir la expansión, incluso habrá buenos argumentos políticos que aconsejen la incorporación de los Estados del Este, pero deberá pagar el precio de aflojar los vínculos económicos que se han establecido entre los actuales miembros.

No desearía que lo dicho hasta ahora se tomara por una crítica radical a las federaciones transnacionales u otras formas de gobierno supranacional. La unión de un grupo de Estados en una institución de ese orden responde a valores de inmensa importancia, entre los que sobresale la solución pacífica de los con-

flictos internacionales. Pero lo que nos preguntamos aquí es si los valores característicos de la izquierda se benefician de que las decisiones dejen de ser competencia de los Estados-nación y pasen a serlo de otras entidades mayores; por mi parte, creo que las causas de la democracia y la justicia social no avanzarán. La izquierda ve con buenos ojos que los adversarios de ayer establezcan nuevas relaciones, como ha ocurrido en el seno de la actual Unión Europea, pero no debería apresurarse a marginar o incluso desmantelar el Estado-nación, porque no es casual que sus grandes avances se hayan producido siempre en comunidades humanas que combinaban un fuerte sentido de la solidaridad nacional con instituciones políticas de gran eficacia, cuyo ejemplo más expresivo en este sentido han sido las socialdemocracias escandinavas.

Seguramente muchos podrían aducir que, por grandes que hayan sido hasta tiempos recientes sus virtudes, el Estado-nación se convierte a pasos agigantados en una institución obsoleta. Los cambios estructurales de la economía mundial imponen la existencia de entidades mayores si se desea tener una mínima posibilidad de controlar los resultados de los mercados. El ejemplo escandinavo representa una vía intermedia: con cierta desconfianza, tanto Suecia como Dinamarca se han visto impelidas a unirse a la Comunidad Europea, —a pesar de los problemas de desigualdad y el alto índice de desempleo que padece esta última—, a sabiendas de que sus respectivas economías podían quedar demasiado expuestas a las fuerzas de las inversiones y los mercados internacionales si permanecían fuera. Sólo los noruegos han determinado conservar su autonomía. Pero el asunto nos llevaría demasiado lejos, y aquí no podemos hacer otra cosa que mostrar nuestro acuerdo con aquellos que sostienen que el Estado tiene más libertad en materia de política económica y social de lo que sugieren los que auguran una fuerte mundialización. El Estado, es cierto, no puede impedir el protagonismo de los capitales y los mercados monetarios internacionales —y tendría que pagar un alto precio si lo intentara—, pero quedan aún muchos ámbitos políticos en los que un fuerte compromiso con la justicia social sería compatible con la creación de condiciones que atrajeran la inversión extranjera y mantuvieran la capacidad nacional de competir en el terreno económico. Uno de los ejemplos más evidentes es la necesidad de educación y formación profesional a cargo del Estado para lograr una mano de obra eficaz y flexible.

Nadie duda de la existencia de problemas —el deterioro ambiental del mundo, por ejemplo— que el Estado-nación no puede resolver por su cuenta. El hecho de que ciertos grupos como Greenpace o los Amigos de la Tierra hayan reunido acti-

vistas en todos los países ha llevado a muchos comentaristas a pensar que estamos asistiendo a la aparición de nuevas formas de ciudadanía, desvinculadas de toda localización geográfica, más allá incluso del territorio europeo. Pero ¿equivalen este tipo de actuaciones a lo que consideramos una política de los ciudadanos?

¿En qué sentido podríamos decir que es ciudadano un activista de Greenpace, si carece de una comunidad concreta con la que identificarse políticamente, y sólo mantiene relaciones de reciprocidad con otros miembros de su grupo? Por tanto, no existe un grupo de conciudadanos con los que se comprometa para buscar las bases de un acuerdo. Cuando se enfrenta a individuos que no comparten su causa, no le queda otro remedio que convertirlos u oponerse a ellos con los medios que tenga a su disposición. No pretendo, naturalmente, condenar su conducta, porque si la causa es noble y el activista la defiende respetando los derechos ajenos (sin violencia, por ejemplo), su actuación puede ser buena y hasta heroica; estoy seguro de que la mayoría de los lectores estará de acuerdo con la oposición de Greenpace a las pruebas nucleares o a la pesca de ballenas. Pero esto no es una ciudadanía en ningún sentido reconocible, porque no implica un debate democrático con intereses y puntos de vista distintos. Puede complementar, pero nunca suplantar a la ciudadanía nacida de las comunidades nacionales, cuyos miembros buscan la práctica de la justicia entre sí.

Traducción de Pepa Linares
